



Fuerzas antidisturbios y agentes del centro de reeducación de Tekes, en Xinjiang, rodeaban en febrero de 2018 a un recluso esposado y con grilletes.

Miles de documentos secretos muestran la brutal campaña de persecución emprendida por Pekín contra la minoría musulmana uigur. Al menos un millón de ciudadanos han sido encerrados

Los rostros de la represión china

Ó. GUTIÉRREZ / P. R. BLANCO

Madrid

La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang adquiere rostro por primera vez. Decenas de miles de fichas policiales, fotografías y documentos oficiales de altos cargos del Partido Comunista de China (PCC), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran la magnitud del sistema carcelario instaurado en esta región de la franja occidental china y la paranoia que guía las políticas de Pekín contra las minorías étnicas.

La investigación periodística de este archivo, liderada por Adrian Zenz, académico alemán y experto en el análisis de las políticas de opresión china en la zona, en colaboración con 14 medios de 11 países, bajo el título *Los archivos policiales de Xinjiang*, permite identificar a miles de reclusos de centros de reeducación construidos por China, entre ellos a menores de edad; clasificar los cargos, la mayoría de escasa consistencia, que los mantienen entre rejas; mostrar a través de imágenes las prácticas de detención, interrogatorio y maltrato llevado a cabo por los agentes contra los presos; las instrucciones para el ejercicio policial en los centros propios de la rutina carcelaria, y, finalmente, analizar la transcripción de discursos públicos de los máximos dirigentes del PCC en Xinjiang, entre ellos su secretario general Chen Quanguo, en los

que se apuntala, siguiendo las instrucciones de Pekín, la doctrina de máxima seguridad frente a los presos, a los que se disparará incluso "a matar" si intentan contra los campos o tratan de escapar.

"Detrás de esta represión", señala Zenz por teléfono, "está el temor y paranoia expresados por [el presidente chino] Xi Jinping sobre la resistencia de los uigures al intento del Estado de controlarlos". Según el estudio realizado por este académico, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, el confinamiento de uigures en campos de reeducación es el "mayor internamiento de una minoría étnica religiosa desde el Holocausto". Al menos un millón de ciudadanos, la mayoría uigures, han sido encerrados en estos campos repartidos por Xinjiang, según una cifra consensuada por periodistas, académicos y Naciones Unidas.

Los archivos policiales de Xinjiang han sido obtenidos por una fuente anónima externa a través de sofisticadas operaciones de intrusión en los sistemas informáticos operados por la Oficina de Seguridad Pública (OSP), la policía china, en los condados de Konasheher, localizado en la prefectura de Kashgar, y Tekes, en la prefectura de Ili Kazakh. El responsable de este *hackeo*, que prefiere no identificarse por razones de seguridad, ha actuado por iniciativa propia, sin condiciones ni mandato de ninguno de los investigado-

res involucrados en el proyecto. Los documentos e imágenes han sido verificados por los periodistas, así como la existencia de tres centros de reeducación de los que se han obtenido los archivos, gracias a un proceso de geolocalización a partir de las fotografías tomadas por los agentes. Hany Farid, profesor experto de la Universidad de Berkeley en el análisis forense de imágenes, ha certificado de igual modo que no hay evidencias de manipulación en los archivos fotográficos.

La prefectura de Kashgar, en la denominada oficialmente Re-

Una investigación identifica a miles de reclusos en centros de reeducación

Una fuente anónima logró la información tras 'hackear' a la policía

gión Autónoma Uigur de Xinjiang, en el vértice fronterizo con Kazajistán y Kirguistán, es precisamente una de las paradas previstas en el viaje oficial iniciado el lunes por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La visita a los centros de reeducación para uigures, etnia mayoritaria en esta región de unos 25 millones de habitantes, es una de las demandas fundamentales trasladadas a Bachelet por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos. El Gobierno de Xi reconoció por primera vez la existencia de estas instalaciones en la publicación de un libro blanco (documento de referencia que guía la política estatal) en octubre de 2018. No obstante, Pekín rechaza las acusaciones sobre la represión de las minorías en Xinjiang y defiende que estos centros sirven para la educación y formación de "estudiantes", que cuentan con libertad de movimiento. El régimen los llama "centros de educación y formación en habilidades profesionales".

Los archivos policiales de Xinjiang muestran una realidad muy diferente. Sirva de ejemplo, según el análisis de las miles de fichas policiales en Konasheher (el registro de los servicios de seguridad abarca a unos 286.000 ciudadanos, casi toda la población de este condado) y del censo en el período 2017-2018, por el que se concluye que al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo

Chen Quanguo, el capo de los lugares de internamiento

Chen Quanguo, el secretario general del Partido Comunista de China en la región de Xinjiang (2016-2021), ha sido siempre un ejemplo para el Gobierno de Pekín por su desempeño en Tibet antes de asumir el cargo en el territorio, un desempeño que le costó ser sancionado por Estados Unidos por violación de los derechos humanos de las minorías étnicas.

Chen es considerado el gran artífice de la represión contra los uigures y, en especial, de la proliferación de centros de reeducación a partir del año 2017.

Las palabras de Chen en los discursos contenidos en *Los archivos policiales de Xinjiang* dan fiel cuenta del nivel de la opresión llevada a cabo en estas instalaciones destinadas al castigo y confinamiento.

En una de las intervenciones ante los suyos, el 28 de mayo de 2017, este dirigente comunista califica de "humano" el internamiento en estos centros por el simple hecho de contar con aire acondicionado, raciones de comida diarias y la posibilidad de que los presos reciban visitas.

LOS ARCHIVOS DE XINJIANG

de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones.

Ante las preguntas sobre el contenido de la filtración, un portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha manifestado en un correo electrónico: "Los asuntos de Xinjiang están relacionados, en esencia, con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, no los derechos humanos o la religión. Frente a la grave y compleja situación contra el terrorismo, Xinjiang ha tomado una serie de medidas de desradicalización decisivas, sólidas y efectivas. Como resultado, Xinjiang no ha visto ningún caso de terrorismo violento durante varios años".

Región estratégica

Además, tras la publicación de los documentos, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin, tachó ayer las informaciones de "un nuevo intento de las fuerzas antichinas de calumniar a China", informa Macarena Vidal Lly desde Pekín. "Españolizar mientras no logrará engañar al mundo, ni puede tapar el hecho de que Xinjiang disfruta de estabilidad y prosperidad, y sus residentes disfrutan de unas vidas felices y plenas", sostuvo en la rueda de prensa diaria de su ministerio, reiterando el argumento con el que Pekín responde a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.

Esta investigación periodística se une a otra media docena adicionales que desde el año 2019 tratan de dar prueba de la magnitud de la campaña de represión sistemática del régimen comunista contra los uigures, etnia que en su gran mayoría profesa el islam. Xinjiang, que hace frontera hacia el oeste con siete países del Asia Central, es de especial relevancia para Pekín, en primer lugar, por ser lugar de paso en su renovada ruta de la seda, y, en segundo lugar, por razones de seguridad: la denominada China interior está copada, tanto en la esfera social, como en la política y económica, por la mayoritaria etnia han. Esta región, ubicada en la zona oriental de la histórica Turquestán, entre el mar Caspio y el desierto del Gobi, con una historia y cultura ligada a los pueblos túrquicos, de rasgos faciales diferenciadores en relación con los han, ha mantenido un tradicional anhelo de autonomía que Pekín ha rechazado hasta su práctica aniquilación.

El traslado de ciudadanos de la etnia han, en un esfuerzo de modificar la demografía de Xinjiang, derivó a finales de la primera década de este siglo en fuertes enfrentamientos. Uno de los episodios más sangrientos fue el choque entre las comunidades uigur y han en julio de 2009 en Urumqi, capital de la región, que se saldó con alrededor de 200 muertos. Tras varios atentados de grupos separatistas armados, Xi dio luz verde en mayo de 2014 a la campaña de nombre Golpe fuerte contra el terrorismo violento, en la que se enmarca la actual escala de represión en toda la región.

El ciudadano uigur Abdurrahman Hasan es uno de los familiares que ha confirmado la veracidad de las fichas policiales al identificar a su mujer durante una en-

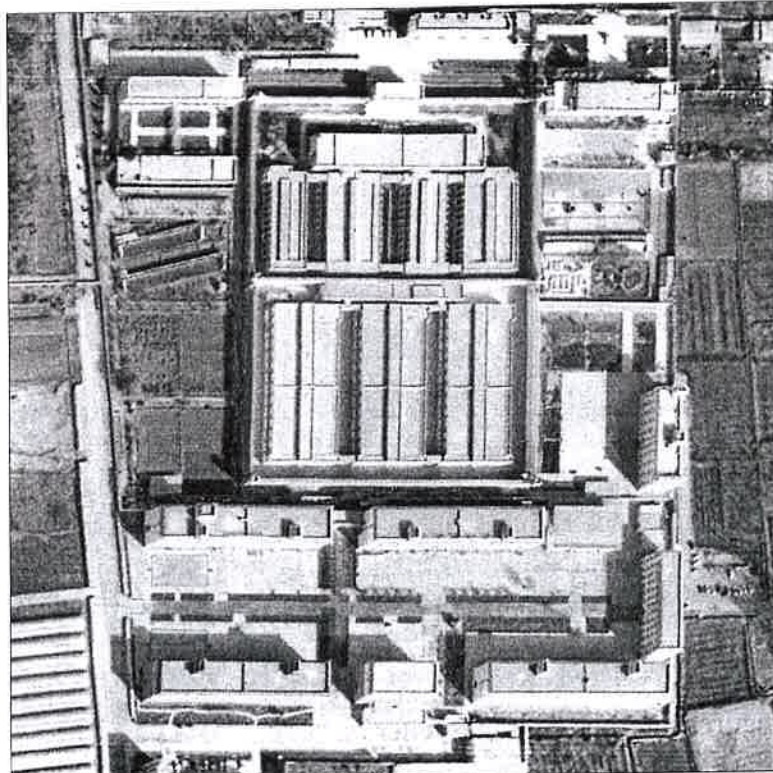


Imagen satelital de un centro de reeducación en Konasheher, en Xinjiang.



EL PAÍS

trevista mantenida en Estambul con la cadena de noticias británica BBC News, que forma parte del grupo de medios detrás de esta investigación. Hasan, un hombre de negocios de Kashgar, que viajaba con frecuencia al extranjero, una actividad que habitualmente levanta sospechas en Pekín, abandonó Xinjiang en enero de 2017, en plena campaña de represión. En el verano de ese año, su mujer, Tunsagul Nurmemet, entonces de 21 años, fue detenida, junto a la madre de Hasan. Según consta en su ficha, Nurmemet fue condenada por "reunir una multitud para alterar el orden social, buscar peleas y provocar problemas". Sin embargo, Hasan afirma: "Su vida se basó en su familia y tampoco interactuaba mucho con los demás. Ella solo visitaba familiares, no sé si tenía muchos amigos. No tenía una gran red social, ¿cómo pudo reunir una mul-

Se traslada a los internos esposados y encapuchados, según las imágenes

Pekín responde que son "mentiras" para calumniar al Gobierno

titud?". Su sentencia asciende a 16 años de encierro.

El retrato obtenido a partir de Los archivos policiales de Xinjiang muestra a una Nurmemet irrecognocible en relación con la foto de carné disponible hasta ahora en bases de datos de uigures víctimas de la represión china. Según la información que recibió Hasan en aquel verano de 2017, su mujer y su madre habían sido "llevadas a estudiar". Esta versión, la del estudio, coincide con muchas otras escuchadas por familiares de los desaparecidos desde el extranjero. Así fue con Nursiman Abdureshid, de 33 años, entrevistada por EL PAÍS también en Estambul. Sus familiares aparecen en fichas de la policía en la prefectura de Kashgar. En el verano de 2017, Abdureshid, que residía ya en Turquía desde hacía dos años, conoció gracias a una llamada a unos parientes que su padre y su hermano pequeño habían sido llevados a un "programa de educación". El mayor de sus hermanos se encontraba ya desde 2016 encerrado por una supuesta deuda. En junio de 2020, Abdureshid logró que la Embajada china en Turquía confirmara las penas impuestas, todas superiores a una década entre rejas. "Pregunté cuáles eran las razones por las que los habían condenado", relata durante la entrevista Abdureshid, "y me dijeron que por 'perturbar el orden social' y que podrían tener la intención de participar en actividades terroristas". El padre de la joven había sido funcionario del Estado y miembro del PCCh. Ella cree que su salida de Xinjiang, sumada a la de su otra hermana, que vive en EE UU, desató las sospechas y la represión contra su familia.

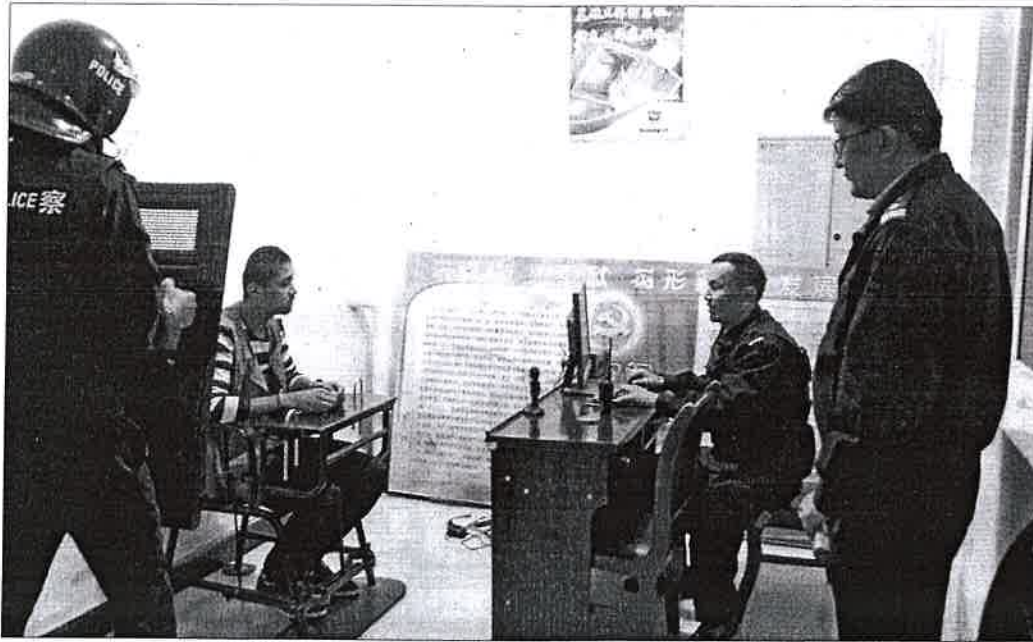
Los archivos policiales de Xinjiang cuentan también con decenas de fotografías tomadas por

las autoridades y servicios de seguridad en el condado de Tekes, en la prefectura de Illi Kazakh. Una treintena de esas imágenes, tomadas entre abril de 2017 y septiembre de 2018, corresponde a escenas tomadas dentro del centro de reeducación de ese condado. A diferencia de lo expuesto públicamente por Pekín, la acción de los agentes dentro de las instalaciones, su armamento y el trato de los reclusos dista enormemente de lo que se espera de un centro de formación profesional.

En las fotografías, los reclusos son trasladados de un lugar a otro encapuchados y con esposas en las muñecas. Hay agentes armados con palos, normalmente de etnia uigur, pero también con rifles de asalto y material antidisturbios, que generalmente portan uniformados de etnia han. Los interrogatorios, según el carrete de fotos sacado de Tekes, se desarrollan en las conocidas como sillas tigre, que forman parte del repertorio de instrumentos usados para la tortura en China, según recoge la ONG Human Rights Watch. Varias secuencias de estos documentos muestran prácticas habituales ya expuestas en la filtración Los cables secretos de China, como la inyección de reclusos, en este caso de varones, normalmente para aportes alimenticios o análisis, así como la obligatoriedad de recitar a diario la doctrina del campo de confinamiento o recibir en grupos la propaganda de autoridades locales.

Se estima que un millón de ciudadanos han pasado por estos centros, una cifra que podría resultar muy conservadora, según uno de los discursos políticos más reveladores incluidos en la filtración. Se trata del pronunciado por el ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, en su visita a Urumqi, el 15 de junio de 2018, y clasificado como "documento secreto". Este archivo transcrito concuerda con las informaciones y fotografías en prensa local del dirigente comunista durante su estancia en la capital de Xinjiang. Zhao cifró durante su comparecencia en dos millones los ciudadanos de Xinjiang "influenciados" por el independentismo, así como otros dos millones por pensamientos extremistas religiosos. Son dos de los tres "demonios" que Pekín sitúa en su particular eje del mal: terrorismo, separatismo e islamismo radical.

Zhao se felicita por la estabilización de Xinjiang a través de la campaña Golpe fuerte contra los terroristas—"tan pronto como asomen la cabeza", dice el ministro chino—. El dirigente del PCCh informó durante su discurso de que 20.000 "terroristas" habían sido "destruidos", cinco veces más que el total de los 10 años anteriores. Pese a que el análisis de los documentos contenidos en la filtración Los cables secretos de China permitía concluir que el tiempo habitual de internamiento en los centros era de un año, el enviado de Pekín a la región puso en tela de juicio incluso la libertad de algunos reclusos. "Si salen", manifestó Chen, "los problemas vuelven inmediatamente, esa es la realidad de Xinjiang". En 2018 Chen sostuvo que las fuerzas de seguridad deben actuar ante los que desafían la ley bajo la premisa "matar primero y luego reportar".



Un recluso de un centro de reeducación de Xinjiang era interrogado en una silla tigre en septiembre de 2018.

P. R. B. / J. A. Á. / Ó. G., Madrid
Rahile Omer arquea levemente la comisura de los labios, como si tratara de esbozar una sonrisa imposible, mientras mira a la cámara con los ojos fijos. Es 20 de marzo de 2018, y esta adolescente uigur posa para una fotografía en alguna comisaría o centro de detención en Konasheher, condado de la región de Xinjiang, en el oeste de China. No ha cometido ningún delito, pero las autoridades la consideran potencialmente peligrosa por sus vínculos familiares: sus dos padres habían sido detenidos meses atrás por causas también inconsistentes. La imagen de esta menor es una de las 2.884 fotografías de ciudadanos de etnia uigur detenidos e internados que han salido a la luz en *Los archivos policiales de Xinjiang*, una filtración que por primera vez permite poner rostro a la represión de Pekín contra esta minoría musulmana de China.

La documentación incluye 454 hojas de cálculo con información registrada entre 2017 y 2018 de aproximadamente 301.000 personas de dos condados. Según se desprende de sus tarjetas de identidad, 286.000 tienen residencia en el condado de Konasheher, básicamente la totalidad de la población en 2018. En total, 282.492 de todos estos ciudadanos fichados por la policía son uigures —entre ellos, 97.689 menores—, según la información estudiada por un equipo liderado por el investigador alemán Adrian Zenz, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, y verificada por 14 medios de 11 países, incluido EL PAÍS.

Entre los adultos, 22.762 tienen al menos dos anotaciones relacionadas con su ingreso en algún tipo de centro de internamiento o prisión, mayoritariamente entre 2017 y 2018, como la fecha o el motivo de la detención, el nombre o la localización de las instalaciones donde fueron arrestados o la duración o el tipo de la pena impuesta. La primera con-

El perfil más habitual entre los 2.884 uigures internos en Konasheher en 2017 y 2018 es el de un varón menor de 30

Retrato robot de los presos

clusión de la filtración es que al menos el 12,3% de la población adulta de Konasheher sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena) o prisiones. La filtración contiene, además, 5.074 retratos tomados en comisarías o centros de detención entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018, de los que 4.989 han podido ser atribuidos a una persona cuya información aparece en *Los archivos policiales de Xinjiang*. EL PAÍS analiza los casos de los 2.884 uigures encerrados en Konasheher en

Otros detalles hallados en las imágenes

Las imágenes dejan observar detalles como que, cuando se tomaran las fotografías, personal femenino vestido de civil vigilaba a las mujeres, mientras que junto a los hombres aparecen policías con material antidisturbios, como porras. Algunos de los detenidos tienen los brazos detrás de la espalda, "lo que posiblemente indica que están esposados", según Adrian Zenz. En unas 40 fotos de mujeres, aparece la misma vigilante con una tarjeta en la que se lee "Centro de Educación y Capacitación de Habilidades Vocacionales

entre 2017 y 2018 y cuyos retratos figuran en la filtración.

Rahile Omer y Memetreshit Memettursun, ambos con 15 años en 2018, son las dos personas más jóvenes que figuran en este archivo, que incluye a otros 13 menores y a 86 ciudadanos de más de 60 años. Las de mayor edad son Aniham Hamit y Merymnisa Ismayil, ambas de 73 años. La primera, que posa con semblante serio y aparece con dos algodones en la parte superior de sus orejas, se encontraba a la espera de juicio en el momento en que fue fotografiada. Merymnisa Ismayil, en cambio, había sido ya condenada a "recibir educación" en lo que China llama "centros de educación ideológica y entrenamiento profesional". Según Pekín, son residencias que los estudiantes pueden abandonar cuando deseen. Sin embargo, la investigación ratifica que son campos de internamiento donde Pekín culmina el adoctrinamiento y asimilación de la minoría uigur. La mayoría de estos 2.884 ciudadanos estuvieron recluidos en uno de estos centros de reeducación.

El grueso de los internados son menores de 30 años (69%), un total de 2.001 personas —incluidos los 15 menores—. También predominan los hombres, 2.490 (86%), frente a las mujeres, 394 (14%). Aunque es difícil trazar el perfil completo por la falta de información, los datos sí permiten afirmar que entre los detenidos hay personas de todas las edades (entre los 15 y los 73) y de todos los niveles educativos.

El análisis de los motivos que aducen las autoridades chinas para justificar las detenciones revela la arbitrariedad de los arrestos y el esfuerzo por forzar los vínculos de los uigures con el extremismo religioso musulmán. En algunos casos, el arresto es recomendado por el IJOP (siglas en inglés de Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas), un programa que combina datos obtenidos automáticamente con informa-

El 12,3% de la población adulta ha sufrido algún tipo de internamiento

Como causa para un arresto vale con tener a un familiar detenido

del Condado de Konasheher". Es un término genérico que no aclara el centro concreto de la región. Sin embargo, según los datos contenidos en los archivos, todas menos una habían sido arrestadas en el centro de reeducación Konasheher Industrial Park.

Algunas personas fueron fotografiadas bastante tiempo después de haber sido detenidas. Una posible explicación es que el momento en que se tomaron los retratos —entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018, según los metadatos de los archivos— coincide con una campaña del Gobierno "para obtener datos biométricos de gran parte de la población", sostiene Zenz. De hecho, en las fichas de 1.435 personas (49,7%) se detalla el grupo sanguíneo.

ción que introducen los funcionarios. La causa puede ser, simplemente, tener a un familiar detenido. En otros casos, se recurre a cargos genéricos como "perturbar el orden social" o a pretextos de índole religiosa, como la lectura del Corán, llevar la barba larga o cubrirse la cabeza con un velo.

Cargos genéricos

El caso de Rahile Omer es uno de los que mejor evidencia la inconsistencia de las detenciones. Su arresto fue recomendado por el IJOP, que había etiquetado a la adolescente como "persona tipo 12", una categoría que alude a quienes presentan "pruebas de peligrosidad" porque están conectados de alguna manera con algún caso policial. Según otros documentos incluidos en la filtración, es la hija pequeña de un funcionario detenido durante una campaña policial en Xinjiang. En realidad, su padre había sido arrestado y enviado al mismo campo de reeducación en el que terminaría su hija, etiquetado también como "persona de tipo 12", después de que su esposa fuera detenida y sentenciada a seis años de cárcel por "perturbar el orden social", un cargo usado por las autoridades contra las personas que están en el punto de mira del Estado.

Las motivaciones religiosas, encaminadas a presentar a los uigures como extremistas, son muy numerosas. Un ejemplo es Emetjan Yolwas, cuyo crimen fue vivir en "una familia con una fuerte atmósfera religiosa", en la que ni se fumaba ni se tomaban bebidas alcohólicas. Según los datos de la filtración, otra prueba que corrobora ese supuesto extremismo religioso es que "sus tres hermanas pequeñas" llevaban velo. En otras ocasiones, las acusaciones tienen más de 30 años, como le ocurrió a Asiygul Yusup, acusado de comprar un libro religioso en 1984 y de haber violado en 1992 "la política nacional de planificación familiar debido al extremismo religioso" al tener otro hijo.

Además de estas condenas por motivos religiosos, *Los archivos policiales de Xinjiang* contienen otro documento con información e imágenes de 330 hombres detenidos por actividades religiosas consideradas ilegales, como por ejemplo, el estudio del Corán. Cuatro de ellos fueron fotografiados en Konasheher. Es el caso de Tursun Qadir, condenado a 13 años de prisión por emplear el "extremismo religioso para socavar el cumplimiento de la ley" y por "reunir a una multitud y perturbar el orden social". El archivo recoge información de Qadir desde 1980, cuando "estudió ilegalmente las escrituras". Entre los cargos que se le imputan, figura que "desde agosto de 2014 hasta abril de 2017 dejó crecer su barba por la influencia del extremismo religioso", una reincriminación que aparece en las causas contra otros hombres. La comparación entre las dos imágenes de Qadir existentes en la filtración certifica que, tras su internamiento en Konasheher, el hombre dejó de lucir su barba. Había iniciado el camino con el que el Estado chino pretende, según confirman documentos de filtraciones anteriores, "lavar cerebros", "limpiar corazones" y "expulsar al diablo".